

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA VIDA A NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN COLOMBIA 2019-2020

MILAGROS MONTOYA MUÑOZ

LUIS ENRIQUE SALAZAR OROZCO



UNIVERSIDAD DE LA COSTA

DEPARTAMENTO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

BARRANQUILLA

COLOMBIA

2021

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA VIDA A NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN COLOMBIA 2019-2020

MILAGROS MONTOYA MUÑOZ

LUIS ENRIQUE SALAZAR OROZCO

Trabajo de Grado para obtener el título profesional de Abogado

TUTORA:

PAOLA MARGARITA CARVAJAL MUÑOZ

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

DEPARTAMENTO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

BARRANQUILLA

COLOMBIA

2021

Agradecimiento

Agradecemos infinitamente a Dios por darnos la oportunidad de iniciar y culminar esta carrera, a nuestros padres a nuestros hijos a nuestras familias que siempre han Sido nuestra gran motivación.

Los Autores

Dedicatoria

Dedicamos este trabajo a Nuestras Familias, nuestros profesores y compañeros a todas las personas que de una u otra forma han contribuido a nuestra formación académica y personal nuestros más sinceros agradecimientos.

Los Autores

Contenido

Capítulo I	11
Problema	11
1.1 Planteamiento del Problema.....	11
1.1.1 Formulación de la pregunta problema	13
1.2 Objetivos de la investigación	13
1.2.1 Objetivo General.....	13
1.2.2 Objetivos específicos	14
1.3 Justificación.....	14
1.4 Delimitación	16
1.4.1 Delimitación espacial	16
1.4.2 Delimitación temporal	16
Capítulo II	18
Marco Referencial.....	18
2.1 Antecedentes de la Investigación	18
2.2 Marco teórico	21
2.2.1 Caracterización constitucional del derecho a la vida.....	21
2.2.2 El derecho a la vida desde la constitución política de Colombia	23
2.2.3 Protección del menor	23

2.2.4 Protección del menor desde el código de infancia y adolescencia. Ley 1098 del 2006	26
2.2.5 Factores de vulnerabilidad del derecho a la vida en menores	29
2.3 Marco Conceptual	30
2.3.1 Derechos fundamentales	30
2.3.2 Derechos humanos	31
2.3.3 Derecho a la vida	31
2.3.4 Garantía	32
2.3.5 Menor	33
2.3.6 Vulnerabilidad	33
2.4 Marco legal	34
2.3.7 Jurisprudencias de la corte constitucional sobre el derecho a la vida en menores	37
2.3.7 Instituciones del Estado encargadas de implementar medidas de prevención y sanción en la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescente.	39
Capítulo III	41
Marco metodológico	41
3.1 Fundamento epistemológico	41
3.2 Enfoque, tipo y diseño de la investigación	42
3.3 Herramientas y Estrategias	43
3.4 Unidad de Análisis	45

3.5 Procedimiento Metodológico	45
Capítulo IV.....	47
Resultados	47
Referencias.....	66

Lista de figuras

Figura

Figura 1. Modalidades de terminación de la vida en Colombia	32
Figura 2. Crecimiento de homicidios a nivel geográfico 2017-2018, variación de porcentajes	56

Lista de tabla

Tabla

Tabla 1. Marco legal de la protección al derecho de vida sobre el menor.....	34
--	----

Resumen

La presente investigación estudia la protección constitucional del derecho a la vida en niños, niñas y adolescentes en Colombia. Desde un punto de vista inicial el derecho a la vida es un derecho fundamental protegido por el derecho y bloque internacional de leyes. No obstante, la comprensión del derecho a la vida desde el punto de vista de ordenamiento legal, no hace un énfasis total en la existencia del ser, del individuo, centrándose sobre la calidad de vida, vida digna y otras percepciones del concepto. Se establecen como objetivos de la presente identificar los factores que vulneran dicho derecho, las medidas preventivas y sancionatorias del mismo y determinar cuáles son los planes por parte del Estado para la disminución de tal vulnerabilidad del derecho fundamental. Desde el punto de vista metodológico, la presenta se traza como una investigación de tipo descriptiva, con un enfoque cualitativo, dejando como unidad de análisis los niños, niñas y adolescentes, y la vulneración del derecho a la vida durante el año 2019 y 2020. Los resultados obtenidos llevan a expresar una protección constitucional con grandes deficiencias, falta de informes y estadísticas que permitan direccionar de manera adecuada los presupuestos nacionales, una jurisprudencia direccionada hacia calidad de vida, vida digna y otros derechos fundamentales, dejando de lado el derecho a la vida o existencia del menor. Como grandes factores en la vulneración del derecho se ven explícitos el conflicto armado, la desnutrición, violencia física y sexual, homicidios y otros, los cuales demandan atención por parte del Estado e instituciones reguladoras.

Palabras clave: Protección, Constitucional, derecho, vida, homicidios.

Abstract

This research studies the constitutional protection of the right to life in children and adolescents in Colombia. From an initial point of view, the right to life is a fundamental right protected by international law and block of laws. However, the understanding of the right to life from the point of view of legal order does not place a total emphasis on the existence of being, of the individual, focusing on the quality of life, a dignified life and other perceptions of the concept. The objectives of this present document are to identify the factors that violate said right, the preventive and sanctioning measures thereof, and determine what are the plans by the State to reduce such vulnerability of the fundamental right. From the methodological point of view, it is presented as a descriptive research, with a qualitative approach, leaving the children and adolescents as the unit of analysis, and the violation of the right to life during 2019 and 2020. The results obtained lead to the expression of a constitutional protection with great deficiencies, lack of reports and statistics that allow to adequately direct national budgets, a jurisprudence directed towards quality of life, a dignified life and other fundamental rights, leaving aside the right to freedom. life or existence of the minor. As major factors in the violation of the right, the armed conflict, malnutrition, physical and sexual violence, homicides and others are explicit, which demand attention from the State and regulatory institutions.

Keywords: Protection, Constitutional, law, life, homicides.

Capítulo I

El Problema

Planteamiento del Problema

La presente investigación, parte del análisis de las normas existentes en Colombia, a nivel internacional, nacional y jurisprudencial, con respecto a la regulación y a la protección de los derechos del menor en el país. En Colombia ha sido creciente la cantidad de niños y niñas cuyos derechos no se encuentran plenamente garantizados y se vulneran los derechos de la infancia, tanto a través de acciones que transgreden el derecho a la vida, la integridad física y psicológica de la población infantil, como por medio de ausencia de oportunidades para el acceso a condiciones que permitan un adecuado desarrollo biológico, psicológico y social o sencillamente la vida.

Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, Se encuentran previstos por el artículo 44 de la Constitución que estatuye: “Son derechos fundamentales de los niños: La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia (CP, 1991, art. 44)

Desde La Corte Constitucional Colombiana, se expresa que:

Colombia no puede continuar con un código que sólo se limita a señalar las situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas; que no desarrolla pautas de políticas públicas para garantizar los derechos de toda la población infantil y adolescente del país; que no otorga responsabilidades a otras entidades como a los entes territoriales, deja la responsabilidad de atención de la niñez al ICBF... (Quiroz, 2009. P.18)

El estudio específico de la presente investigación se centra sobre el derecho a la vida. El artículo 11 de la Carta Política, especifica que: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

El derecho a la vida también es desarrollado en el Código de Infancia y Adolescencia, específicamente en su artículo 17 de la siguiente forma: Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente”.

El derecho a la vida es el principio que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva, y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no (Castaño (2005. p.94).

Desde el punto de vista estadístico, para 2019, se presentaron en el país 596 crímenes contra hombres menores de edad y 112 contra mujeres menores de 18 años. Respecto a menores de cinco se contabilizaron 60 asesinatos de ambos sexos. Respecto a violencia intrafamiliar, el

informe señala la pérdida de vida de 15 niños y 13 niñas (Justicia ET, 2020). Parra y Báez (2019), expresan que la constitución política de Colombia refiere que: "Colombia es un Estado Social de Derecho [...] fundado en el respeto de la dignidad humana [...]" de esto se traduce que uno de los pilares fundamentales de la carta se direcciona hacia la protección de la vida.

Debido a lo anterior fundamentado, se puede manifestar que uno de los principios constitucionales más importantes está siendo vulnerado. El derecho a la vida es un derecho universal, por lo cual se debe garantizar y respetar, sobre todo necesario para concretar otros derechos fundamentales, de manera analítica se puede expresar que, si no existe vida, no tiene sentido otros derechos, lo que puntualiza un evento primordial de atención y garantía a nivel nacional, internacional y jurisprudencial.

Formulación de la pregunta problema

Se establece como pregunta problema: ¿Cómo se garantiza la protección constitucional del derecho a la vida a niños, niñas y adolescentes en Colombia?

Objetivos de la investigación

Objetivo General

Analizar la protección constitucional del derecho a la vida a niños, niñas y adolescentes en Colombia en el periodo 2019-2020.

Objetivos específicos

- Describir los factores de vulnerabilidad del derecho a la vida en niños, niñas y adolescentes en Colombia en el periodo 2019-2020.
- Indicar las medidas preventivas y sancionatorias referentes al derecho a la vida en niños, niñas y adolescentes en Colombia en el periodo 2019-2020.
- Determinar cuáles han sido los planes desarrollados por parte del Estado que garantizan la protección del derecho a la vida en niños, niñas y adolescentes en Colombia en el periodo 2019-2020.

Justificación

Los niños, niñas y adolescentes, son titulares de todos los derechos que han sido reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales y las convenciones internacionales que los desarrollan. Del mismo modo, debido a su vulnerabilidad y necesidad especial de protección y cuidado, los niños menores de edad (18 años), tienen garantizados los derechos específicos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aprobada el 20 de noviembre de 1989 por las Naciones Unidas.

La situación de vulneración en Colombia aunque ha mejorado estadísticamente, todavía representa una problemática grande tanto a nivel nacional como internacional. Según el congreso de la republica (2006), específicamente en su artículo 17, Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para

su desarrollo integral acorde con la dignidad del ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano.

Desde la perspectiva de Campos (2009), La Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño representan un cambio de paradigma. Se reconoce a niños/as, hoy, también a los adolescentes como sujetos de derechos. No obstante, aún resulta dificultosa la adecuación de políticas, medios y leyes para el sólido establecimiento de la Doctrina de Protección Integral. Asimismo, el Estado, como sostén y garante, aún no ha brindado las respuestas necesarias, a la demanda de necesidades de la sociedad y de la familia en particular; son demasiados los intereses sectoriales, económicos y de poder que se interponen permanentemente en la problemática de la infancia y la adolescencia en un país como Colombia, lleno de conflictos y con situaciones en que se vulnera los Derechos Humanos.

Es importante destacar y priorizar al derecho a la vida, como derecho principal fundamental, si no existe vida, la garantía de otros derechos queda sin efectos antes un menor de edad que ya no existe, por tal motivo se enmarca la necesidad de desarrollo de una investigación que permita describir de manera efectiva este derecho principal. Muchos entes responsables de derechos fundamentales en el menor, hacen referencia al derecho a la vida, como calidad de vida. No obstante, desde la percepción del investigador, significan dos vertientes, no se puede tener calidad de vida, si no existe en el planeta, por tal motivo se hace necesario atender por parte de gobiernos y entes internacionales la protección de vida del menor de edad, bien sea bajo homicidios, violencia intrafamiliar o cualquier otro flagelo que afecte la vida del menor.

Desde un punto de vista teórico, la presente pretende reunir normas y leyes que aplican sobre la protección a la vida, como eje principal, desde el punto de vista nacional e internacional. La presente investigación pretende abordar cuales han sido o son los programas de atención al derecho a la vida del menor y su existencia.

Desde el punto de vista práctico, la presente investigación es un espacio que permitirá poner todos los conocimientos adquiridos durante la profesionalización en el análisis de una problemática importante que, aunque Colombia destaca con altos porcentajes, es una problemática que afecta al mundo.

Delimitación

Delimitación espacial

La investigación será llevada a cabo en Barranquilla- Colombia y tendrá como contexto de estudio la plataforma normativa nacional, internacional y jurisprudencial que regula la protección del derecho a la vida como derecho fundamental principal.

Delimitación temporal

Los datos, referencias y material documental que serán considerados para el desarrollo de la siguiente investigación, se enmarcan en el periodo comprendido entre 2019-2020

Se tomaran en consideración la constitución política de 1991, El código de infancia y adolescencia, la ley 1878 de 2018, por la cual se modifican algunos artículos de la ley anterior.

Es necesario también el estudio de las leyes del bloque de constitucionalidad referentes a la temática de estudio.

Capítulo II

Marco Referencial

Antecedentes de la Investigación

Para abordar de manera eficiente la temática de estudio, las investigaciones señaladas a continuación se conforman como desarrollos que conllevan a la comprensión de la investigación actual. Desde un punto de vista inicial, se tiene a Corredor Et al (2020), en su investigación “Derecho a la vida, déficit en el sistema de Salud colombiano”. El estudio mencionado, desde un punto de vista claro, engloba al derecho a la vida como eje fundamental de los derechos existentes sobre el menor. Para ello dan soporte a su investigación en artículos científicos y tesis de grado, acompañada de normativas y leyes nacionales e internacionales, las cuales permiten expresar y realzar que el derecho a la vida es el derecho más importante de todos los seres humanos, el único que cuya negación vuelve ineficaz los otros derechos existentes. Además, recalca que, como Estado de Derecho, el Estado debe defender este derecho y principios contenidos en la carta pública direccionados hacia el mismo logro.

De manera adicional, estudian el derecho a la salud como un déficit marcado en el país, el cual de alguna manera u otra se encuentra relacionado con el derecho a la vida. Dan como conclusión a partir de su investigación que el derecho a la vida es un derecho fundamental, la vida humana comienza desde el mismo momento de su fecundación o nacimiento por lo tanto tiene derecho a que se le respete y nada justifica su eliminación no hay bien superior a la vida es el fundamento de los demás derechos

Zapata (2015), lleva a cabo una investigación titulada: “La vulneración de los derechos humanos de los menores en Colombia como consecuencia del conflicto armado”. Una investigación muy completa y detallada acerca de la vulneración de los derechos humanos del menor. Los autores de manera explícita dentro de su investigación señalan que cuando se hace referencia al derecho a la vida, se trata de un derecho en doble vía, debido a que por una parte, existe el derecho de exigencia de los menores de protección, fundamentalmente de la vida y por otra parte, el deber de las autoridades de brindar una protección adecuada de manera que se eviten los atentados contra la vida del menor, su integridad corporal, haciendo énfasis en el homicidio en todas sus formas, mutilaciones, tratos crueles, tortura y formas que el ciudadano no desea que le confieran.

El estudio realza que el derecho a la salud, no se encuentra contenido dentro de los derechos que la carta política cataloga como fundamentales, sin embargo, adquiere tal carácter cuando se encuentra en conexidad con el derecho a la vida, o cuando la protección garantiza la continuidad de vida del afectado en este caso menor (Corte Constitucional, Sentencia C- 355 del 2006).

Del mismo modo, dentro del artículo 175 de la ley 1098 del 2006, se expresa que el Estado Colombiano tiene como deber prohibir atentados contra el derecho a la vida de menores, los cuales pueden ser vulnerados por acción u omisión del Estado colombiano: del mismo modo, deben tomarse todas las medidas para la protección y preservación del derecho a la vida (Obligación positiva). La protección de la cual se ha venido desarrollando en los presentes párrafos, por parte del Estado, no solo incluye a legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes resguardan la seguridad, bien sea mediante fuerzas policíacas o armadas. Por tal motivo, las medidas necesarias deben prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida, como

consecuencia de actos criminales, violencia, crimen organizado y reclutamiento. Del mismo modo expresa mediante su estudio que, el derecho a la vida de los menores solo puede ser de manera efectiva garantizado cuando el Estado ejerce a plenitud la exclusividad de la administración de la justicia.

Como puede evidenciarse, se trata de una investigación que reúne una serie de teóricos y normativos importantes para la temática de estudio. Desde las conclusiones, emiten que el Estado Colombiano a través de sus entes reguladores deben llevar a cabo programas que permitan evitar o erradicar las vulneraciones del derecho a la vida, ya que durante la infancia, los menores son un elemento vulnerable, y aun sin llegar a la muerte un individuo vulnerado o abusado es en su crecimiento otro vulnerador más.

En continuidad de ideas, Adams (2010), despliega su investigación la cual lleva por nombre “Perspectiva de la niñez en Colombia en el sistema nacional de protección al menor”. Se trata de una investigación centrada hacia una caracterización del contexto de protección al menor en el país, el cual sienta sus bases sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), siendo esta la instancia encargada a nivel nacional de velar por los derechos del niño, niña y adolescente.

Desde el punto de vista del investigador, lo cual hace alusión a algunas situaciones plasmadas en la presente investigación, el ICBF trata la protección de los derechos desde calidad de vida, como precepto principal, movilizándolo hacia diferentes modalidades de atención por parte de la institución. Desde este punto lo expresado por Quiroz (2009), tiene validez al expresar que Colombia no puede continuar con un código limitado a señalar vulneraciones en niños, niñas y adolescentes, expresando la necesidad de otorgar responsabilidades sobre entes territoriales y no solo dejar la atención de la niñez y la garantía de sus derechos al ICBF.

Durante un estudio diagnóstico de la niñez en el país, el autor señala que 7 niños mueren de manera diaria por causas violentas, destacando este como una cifra desgarradora existente en el país, a pesar de estar comprometida con una de las convenciones de mayor alcance suscritas hasta ahora, la los Derechos del Niño, ratificada en 1989 por 192 países.

Marco teórico

Caracterización constitucional del derecho a la vida

Los siguientes son caracteres constitucionales del derecho a la vida, Gallego (2005):

- **El derecho a la vida es un derecho humano**, en cuanto a su titularidad, porque pertenece igual e incondicionalmente a cada individuo por el solo hecho de haber nacido humano, con lo cual tiene la categoría de derecho atribuido universalmente a todos en igual forma y medida, como que todas las personas son titulares de tal derecho, prescindiendo de cualquier otro atributo o condición. Y en cuanto a su fundamento porque la vida es condición indispensable para ser seres en el mundo y es experimentada como una necesidad básica por la mayoría de los seres humanos, por lo que es un bien de esencial importancia.
- **El derecho a la vida está dotado de una posición preferente y de una obligatoriedad jurídica directa e inmediata**, constituye un conjunto complejo de obligaciones estatales, lo cual conlleva que todos los poderes del Estado, incluido el legislativo, se hallan limitados por y sometidos al imperio del derecho a la vida, que vendría a ser un derecho sobre el derecho, en tanto obra como vínculo y límite

jurídico que condiciona la producción jurídica. Este derecho se interpone frente a cualquier decisión política, incluyendo las provenientes del poder que dicta leyes.

Una forma superior del orden jurídico. Obliga a todos los poderes del Estado, en particular al poder legislativo que debe abstenerse de producir normas que contraríen el derecho a la vida y desarrollar todas las materias relacionadas con dicho derecho, a fin de que éste pueda ser realizado y protegido adecuadamente.

- **El derecho a la vida es un derecho de libertad**, instituye a favor del titular un área de autonomía en la que el poseedor del derecho es libre de decidir respecto de una alternativa de acción entre la continuación o la terminación de la vida: el derecho de permanecer vivo tanto como pueda o el derecho de renunciar a continuar viviendo, según elija
- **El derecho a la vida produce relaciones de tipo vertical del individuo frente al estado como también relaciones de tipo horizontal, del individuo titular frente a individuos particulares**, el derecho a la vida impone más deberes y más fuertes al Estado, pues éste no sólo debe respetar dicho derecho, sino que es su garante, lo que le impone un cúmulo de deberes positivos; mientras que los particulares deben respetar el derecho ajeno, pero no están llamados, en principio, a su satisfacción o protección.
- **El contenido del derecho a la vida consiste en los comportamientos para la satisfacción de las pretensiones amparadas por este derecho que el titular puede exigir al Estado y a los particulares.**

El derecho a la vida desde la constitución política de Colombia

Dentro de la constitución política, existe el artículo 11, “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.” La cual proviene del artículo 3 de la declaración universal de derechos humanos, 1948, “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”

Protección del menor

La protección del menor, se ha configurado como uno de los objetivos básicos de la constitución colombiana, respecto a esta temática, se dispone dentro de la carta política artículos como 13, 16, 42, 43 y 44. En el artículo 44, se expresa la prevalencia de los derechos de la niñez, y la responsabilidad estatal de asistir y proteger a los menores, lo anterior con el motivo de garantizar el desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de derechos. La anterior protección, se extiende al campo judicial y tiene como objeto garantizar, en todos los procesos donde el niño o niña sea víctima, todas las garantías necesarias conforme al interés superior de este.

Del mismo modo, a los menores se les debe una protección prevalente, la cual permita respuestas inmediatas o prioritarias hacia situaciones de riesgo o peligro, con el fin de proteger sus derechos y prevenir su vulneración. El Estado tiene la obligación de dar prioridad a los menores en la atención y los servicios que se ofrecen a la población en general. Se puede concluir que el trato diferente que se otorga a las personas mayores y a las menores de edad no es per sí discriminatorio, en el sentido prescrito por la Convención sobre los Derechos del Niño y

la Convención Americana de Derechos Humanos. Por el contrario, el trato diferenciado sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos reconocidos a menores (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002).

Haciendo referencia al artículo 13, existe un trato preferencial hacia quienes se encuentran en circunstancias de debilidad o están impedidos a participar en igualdad de condiciones, los niños y niñas son individuos que ejemplifican ambas condiciones hecho que los hace acreedores a especial protección por parte de su mismo núcleo familiar, de la comunidad y finalmente del Estado representado en las autoridades Públicas.

Debido a lo anterior expresado, los derechos de los menores son fundamentales y prevalentes sobre los derechos de los demás, por tal motivo la Corte Constitucional en su jurisprudencia, establece parámetros de protección como:

Artículo 13. "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan."

Artículo 14. "Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica."

Artículo 16. "Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico."

Artículo 42. "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre sus integrantes.

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.

La ley reglamentará la progenitura responsable.

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.

Las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.

También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.

Artículo 43. "La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia."

Artículo 44. "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Protección del menor desde el código de infancia y adolescencia. Ley 1098 del 2006

La protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, debe realizarse desde garantía del ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento.

Por tal razón cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Además, no serán juzgados ni declarados penalmente responsables ni sometidos a sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años. Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal.

Además de protección del menor, debe garantizarse un desarrollo integral del menor. Es decir, asegurar el desarrollo armónico, normal y sano de los niños, desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético, así como la plena evolución de su personalidad. Corresponde a la familia, la sociedad y el Estado, brindar la protección (art. 20, Ley 1098 del 2006).

Con esto claro, es fácil comprender que la autoridad y legitimidad del Estado para irrumpir a la familia e institucionalizar al niño, niña y adolescente con necesidades insatisfechas deviene de la invocación del Principio de Subsidiariedad que significa, el deber del Estado de proteger a los incapaces para cuidar de sus bienes y sus mejores intereses, es decir, en ausencia de sus padres o sus representantes legales.

De tal manera, el Estado empieza a actuar cuando concibe que exponer al peligro el bienestar del niño o la niña y su futuro como adulto productivo por la falta de un acompañante; en sí es un corrector de conductas y situaciones estimadas como anómalas que dañan el capital social del niño o la niña. Se le asume como un sujeto social que se ha configurado por la

diversidad de fuerzas dinámicas en las que está inserto, entre las que le cabe plena responsabilidad a las que tiene con el Estado y la familia (Tejeiro, 2005).

Toda esta situación conlleva además a que todo niño, niña y adolescente es una persona Única y valiosa y, como tal, deberán respetarse y protegerse su dignidad individual, sus necesidades particulares, sus intereses y su intimidad (Principio de dignidad). En este sentido, el artículo 1 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 establece dentro de sus finalidades la de “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Todo esto hace que prevalezca el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humanas, sin discriminación alguna”.

Por su parte, el artículo 17 del Código de Infancia y Adolescencia ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 consagra el derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad, goce y respeto de todos sus derechos humanos (Principio de Igualdad y no discriminación) tanto en el derecho internacional como en el interno. Por ello los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar de dicho ordenamiento las normas de carácter discriminatorio y combatir toda práctica discriminatoria.

En síntesis, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes frente a los de cualquier persona en una decisión oficial y privada; o en otros términos, que si los derechos de alguien están en contravía a los de la infancia, al final, ésta siempre prevalece. Lamentablemente, estamos ante una mirada privativa de los derechos, que pone en un pedestal a los niños, niñas y adolescente frente a las demás personas en sus distintas etapas de vida: juventud, adultez, vejez.

Es decir, la representación del niño como sujeto de derechos es eminentemente jurídica, es un logro ético y político surgido en la gobernabilidad global. Impera sin ninguna duda en el campo jurídico, legislativo y posiblemente administrativo de cada país firmante de la Convención de los Derechos del Niño. Su propósito es generar una nueva cultura de infancia: un patrón de relacionamiento democrático y humano entre los adultos y los niños (Pabón, 2018).

Bajo estas circunstancias se hace necesario destacar que los menores conforman una población vulnerable que demanda un tratamiento especial y por lo cual resulta imperativo la exigencia a los Estados para prevenir y erradicar estas situaciones y para ello se requiere satisfacer todas y cada una de sus necesidades en procura de que puedan lograr un desarrollo óptimo. Es inexcusable que la niñez sea desprotegida por el Estado y que la conciencia de toda una sociedad no se rebele y no se perturbe. Lo que esto demuestra es una crisis fundamental de nuestra sociedad, los efectos de los conflictos armados en la niñez son responsabilidad de todos los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil.

Factores de vulnerabilidad del derecho a la vida en menores

La legislación internacional, expresa que el conjunto de derechos fundamentales de los cuales goza el niño, niña o adolescente son inalienables, irrenunciables y no pueden ser vulnerados bajo ninguna instancia (interés superior del niño). Ahora bien, desde la teoría se puede describir esto como un factor primordial, pero desde la práctica, sucede todo lo contrario. En Colombia, órganos como la Defensoría del Pueblo, constantemente realizan llamados de atención o alerta, debido a la situación lamentable de vulneración sistemática de derechos en el

niño. Desde el año 2015, hasta el año 2019, se verifica un aumento de muertes por violencia sexual y muertes violentas en menores.

Sin embargo, lo mayor preocupante para las autoridades es que para el 80% de los casos, los delitos son cometidos por personas dentro de su entorno familiar o cercano a esta (Defensoría del Pueblo, 2016). Del mismo modo, la desnutrición también es un factor que suma a la hora de una vulneración del derecho fundamental a la vida, según la Human Right Watch (2020), en Colombia las muertes por desnutrición en niños es en 2019, se registraron 64 muertes relacionadas con la desnutrición, mientras que en 2018 hubo 105; en 2017, 50; en 2016, 85 y en 2015, 48.

Puede establecerse entonces que la gran parte de los factores que vulneran el derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes en el país son sociales, donde se tiene la pobreza, falta de educación (escolar y sexual), la violencia, el desplazamiento social y otros.

Marco Conceptual

Derechos fundamentales

Un derecho fundamental parte de dos vertientes; por un lado el resultado de acuerdos básicos de diferentes manifestaciones sociales, lo que legitima un estado de derecho (situación colombiana); y por otro, el estatuto jurídico de los individuos en su relación con el Estado y ellos mismos (Anzures, 2004).

Derechos humanos

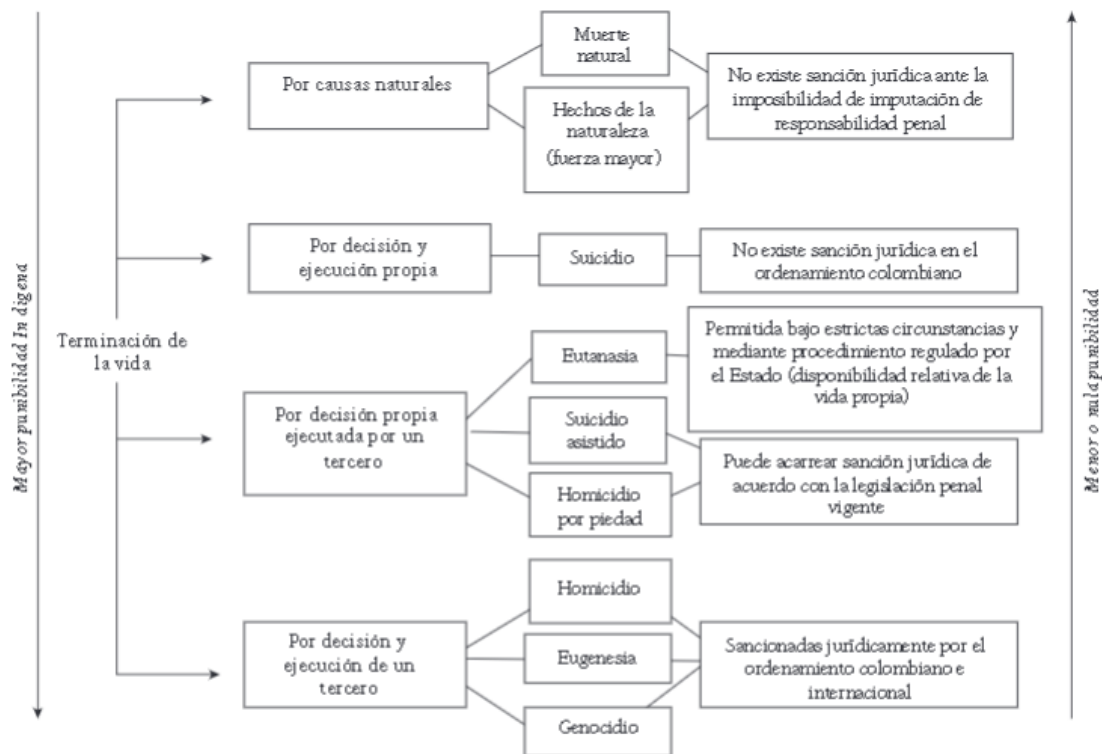
La Organización de Naciones Unidas (ONU, s.f) expresa que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin tener distinciones de sexo, edad, raza, origen étnico y otros. Entre los derechos humanos fundamentales, se encuentra el derecho a la vida y a la libertad, educación, trabajo y otros.

Derecho a la vida

Según el artículo 3 de la declaración universal de derechos humanos, citado en sentencia T-282 de 2011, "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona", lo cual lleva a comprender que nadie podrá ser privado, de la vida arbitrariamente.

En Colombia, se puede clasificar las modalidades de terminación de la vida de la siguiente forma:

Figura 1.



Modalidades de terminación de la vida en Colombia. Fuente: Parra y Báez, 2019.

Para el caso actual, se estudia la vulneración del derecho a la vida desde la acción de un tercero, partiendo de análisis que sin la vida de un individuo, conceptos como calidad de vida, o vida digna no tienen valor representativo o no pueden generarse vulneración de otros derechos fundamentales.

Garantía

Según Machicado (2009), garantía es una institución de Derecho Público de seguridad y de protección a favor del individuo, la sociedad o el Estado que dispone de medios que hacen

efectivo el goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que sean desconocidos. Es una protección frente a un peligro o riesgo. Garantía, es un medio que ofrece la constitución política, los derechos que ella consagra.

Menor

El menor es aquel individuo que no alcanza la mayoría de edad, que para el caso colombiano y su normativa es de 18 años. Esto lo hace estar configurado como un individuo de protección especial y una serie de garantías constitucionales.

Vulnerabilidad

Comprender el concepto de vulnerabilidad en derechos humanos, referidos a la presente temática de estudio, hace necesario establecer su surgimiento en la década de 1970, cuando tuvo un enfoque centrado en desastres naturales y problemas ligado al desarrollo. Para la década siguiente, este se aproximó hacia las estructuras y los procesos socioeconómicos de desigualdad y pobreza, estableciendo así estos factores como papel fundamental de portadores de la vulnerabilidad. Por lo anterior señalado ser vulnerable es relativo (Pérez de Armino, 2000: p.1). Se lleva a entender entonces que la vulnerabilidad es una situación de riesgo ante una expectativa específica, pobreza, falta de capacidad, falta de conocimiento y con el caso estudiado falta al acceso y goce de derechos.

Marco legal

El Derecho a la vida es sustentado y referenciado en un conjunto de normas establecidas a nivel nacional e internacional en la cual destacas las siguientes:

Tabla 1.

Marco legal de la protección al derecho de vida sobre el menor

LEY O NORMA NACIONAL E INTERNACIONAL	ARTICULO O PARÁGRAFO	DESCRIPCIÓN
Constitución política de Colombia	Artículo 11	El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte
Código del menor	Artículo 4.	Todo menor tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado garantizar su supervivencia y desarrollo.
Ley 1098 del 2006. Código de infancia y adolescencia	Articulo 17	Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y

		goce de todos sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano.
Ley 294 de 1996. Medidas para la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar	Artículo 3, sección f.	Los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás;
Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"	Artículo 19.	Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Ley 12 de 1991. Convención sobre los Derechos del Niño	Artículo 6.	Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño

Ley 83 de 1946. Ley Orgánica de la Defensa del Niño	Artículo 109	<ul style="list-style-type: none"> • 109 Se prohíbe a los menores de diez y ocho años todo trabajo que perjudique se salud, su vida o su moralidad, que sea excesivamente fatigante, o que sobrepase sus fuerzas.
Declaración de los Derechos del Niño.	Principios 1 y 2.	<ul style="list-style-type: none"> • El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. • El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño.
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948	Artículo 25, numeral 2.	<p>La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.</p>

Código Civil

Artículo 91.

Protección al que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona, o de oficio, las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra

Fuente: Elaboración propia

Jurisprudencias de la corte constitucional sobre el derecho a la vida en menores

Las jurisprudencias señaladas a continuación guardan relación con la temática en desarrollo de la presente, el derecho a la vida como derecho fundamental en el menor. La Sentencia T-843/11, establece como eje principal, el derecho a los niños, niñas y adolescentes a no ser objeto de ninguna forma de violencia; como ha sido presentado en otros acápites, la violencia es un factor principal de vulneración de este derecho. En la sentencia de manera especial se hace referencia a la violencia sexual sobre la niña, en la cual sienta sus bases jurídicas

en el artículo 44 de la carta magna, que reconoce que los derechos de los niños son fundamentales y les otorga un lugar privilegiado en el ordenamiento constitucional

Del mismo modo,

(...). La Constitución Política no aborda un punto acerca de ¿cuándo se empieza a ser persona? ¿Desde la concepción? ¿Desde el nacimiento? La Carta remite a la ley civil. Sin embargo, es posible afirmar al menos que por reenvío constitucional al derecho internacional, por las normas internacionales vigentes, por la legislación interna y, sobre todo, por la filosofía humanista del Estado social de derecho, es preciso deducir, como lo hace aquí la Corte, que se tienen derechos desde la concepción (Corte Constitucional sentencia. T-179, mayo 7 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Lo anterior, expresa la obligación de velar por la vida del nasciturus, no solo como una simple alimentación del nacido vivo, sino una constante vigilancia médica en la atención del parto, primeros cuidados del niño y otros (Arrieta y Meza, 2019).

Continuidad de sentencias, T-348 de 2016, Corte Constitucional, expresa que de conformidad al artículo 44 de la constitución, son derechos fundamentales de este la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social (derecho a la vida como eje fundamental de la presente, y otros como factores de vulnerabilidad), esta misma disposición sostiene, que los niños deben ser protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Los menores de edad son sujetos de especial protección y sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás (Solano, 2019).

Existen otras sentencias, las cuales pudieran ser abordadas en el presente análisis, no obstante, la presente busca el derecho a la vida como derecho fundamental, principal, sin el cual otros derechos no pueden tener cabida. Un ejemplo de esto, es que a nivel constitucional muchas veces se aborda el derecho a la vida como calidad de vida, no obstante esta distancia del abordaje de la presente investigación al tratar la vida como el derecho a vivir a existir.

2.3.7 Instituciones del Estado encargadas de implementar medidas de prevención y sanción en la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescente.

En Colombia como en diferentes países a nivel mundial, existen diferentes organizaciones internas las cuales promueven y protegen los derechos humanos. Estas instituciones en conjunto con otras de orden internacional, trabajan de manera cohesionada para la creación de fuentes y redes de apoyo (Rodríguez, 2011). Estas instituciones son enumeradas a continuación:

- Personerías distritales y municipales, un personero es un representante de la comunidad, el cual ejerce defensa sobre los derechos humanos, este recibe quejas sobre situaciones violatorias dentro de la comunidad, para posterior informar a las autoridades competentes para incurrir en acción.
- Defensoría del pueblo, la defensoría se encarga de la protección de los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos. Este hace parte de los organismos de control que hacen parte del Estado. Cualquier individuo puede presentar quejas ante esta institución.

- Procuraduría general de la nación, esta tiene como finalidad vigilar que se cumplan la normativa constitucional, decisiones judiciales, actos administrativos y otros aspectos de ley. Esta entidad defiende derechos tanto individuales como colectivos.
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia, adultos mayores y el bienestar de la familia.

Capítulo III

Marco Metodológico

En el presente capítulo se hace referencia a la estructura metodológica que permite dar respuesta al objeto de estudio el cual corresponde a la protección constitucional del derecho a la vida de niños, niñas y adolescentes en Colombia en el periodo 2019-2020, esta se enmarca dentro de una investigación de carácter Jurídico.

A continuación, se hace una descripción del diseño metodológico que permite realizar una correcta proximidad científica, es decir mantener coherencia con el objeto de estudio.

En relación a lo anterior, dentro de la epistemología y el método científico existen técnicas y procesos para diferentes campos de estudio. Dentro del marco metodológico de la presente investigación, se exponen razones suficientes para la elección del procedimiento o técnica a utilizar. Los puntos desarrollados a continuación son necesarios para la comprensión del método distintivo necesario para lograr los objetivos trazados que dan solución a la problemática trazada (Bechara, 2018).

Fundamento epistemológico

La epistemología se conoce como una ciencia que se encarga del estudio del conocimiento, es definida por Ceberio y Watzlawick (1998), como un término que deriva de episteme, lo cual tiene como significado conocimiento, una rama de la filosofía que se ocupa de elementos los cuales tienen como propósito adquirir el conocimiento utilizando para ello una

serie de mecanismos, herramientas, métodos y validez para los mismos. Desde el punto de vista de Piaget, es el estudio que permiten avanzar de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento o uno más avanzado.

Cuando se dio inicio a la comprensión de la problemática y su entorno, se tienen bases muy someras acerca de la problemática y su manifestación, el desarrollo de la presente, permite ir avanzando en la comprensión del tema, obtener información desde referentes teóricos, obtener información de manera primaria, o de donde se sucede la problemática, complementada con otras investigaciones, que dan como resultado la creación de conocimiento; un estado inicial de comprensión, hasta un estado mayor.

Enfoque, tipo y diseño de la investigación

Con el motivo de desarrollo de la investigación actual, se caracterizan el enfoque de la investigación y la tipología de esta. El enfoque de investigación se realiza posterior de una problemática de investigación, preguntas y objetivos acerca de la misma. A partir de este punto, se elabora un diseño y se selecciona la muestra estudio según el tipo en enfoque seleccionado.

La presente investigación, hace uso de un enfoque cualitativo, definido por Blasco y Pérez (2007. p. 25) como un aspecto que estudia la realidad en sus contexto natural y como sucede, interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. En el estudio actual se pretende estudiar la protección constitucional del derecho a la vida, en niños, niñas y adolescente en el año del 2019-2020 en Colombia.

Bajo la epistemología, otro factor importante del diseño de la investigación es el tipo de investigación, para Arias (2012), el tipo de investigación descriptiva, consiste en la

caracterización de un hecho y su manifestación en el entorno donde se produce, con el propósito de determinar su comportamiento.

La investigación actual se trazó en un ámbito descriptivo por cuanto fue necesario describir como se manifiesta la variable de estudio en la población o conjunto seleccionado, cabe resaltar que la variable de estudio es el derecho a la vida en menores.

En el mismo orden de ideas, el desarrollo actual se bosquejó como investigación documental; al respecto Palella y Martins (2012:90), expresan que “la investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de historia”. la información documental es base para la presente investigación, por lo cual son necesarios un análisis en la problemática desde datos emitidos por fuentes específicas, instituciones nacionales, internacionales y otras importantes en el país.

Para finalizar la investigación se traza sobre un diseño no experimental, definido por Hernández, Fernández y Baptista (2010), como: “los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables, y en los que solo se observa la variable en su ambiente natural para después proceder con su análisis”

Herramientas y Estrategias

Las herramientas y estrategias son conocidas también como las fuentes de información en la cual destacan fuentes primarias y fuentes secundarias. Una fuente de información son todos los documentos que plantean conocimiento de un área en específico. Para Santesmases (2009), una fuente de información puede ser una persona, un ente, un objeto, o cualquier medio desde

donde se obtengan datos los cuales necesitan ser analizados. Asimismo, un dato es el valor de una variable, esta proporciona información referente a una situación o acontecimiento y es la base de los análisis estadísticos, estos pueden ser primarios o secundarios.

Un dato primario, es una fuente idónea adaptada a los propósitos de la investigación, se obtiene de manera directa de la realidad y recolectada mediante instrumentos. Existen diferentes fuentes primarias, pero para la investigación actual, la información es obtenida desde análisis de datos cualitativos emitidos por diferentes entes reguladores existentes tanto a nivel nacional como nivel internacional.

Haciendo alusión a las fuentes secundarias, se hizo uso de otras investigaciones relacionadas al tema y expresadas en los antecedentes y estados el arte de esta, dichas fuentes fueron obtenidas desde los principales repositorios de información como lo son: Redalyc, Scielo, Scopus, repositorios institucionales y otros.

Unidad de Análisis

La unidad de análisis:

Representa el objeto social al que se refieren, en la investigación empírica, las propiedades estudiadas (...) En una primera aproximación, podemos identificar, en las investigaciones de tipo sociológico, los siguientes tipos de unidades de análisis: el individuo, el conjunto de individuos, el grupo-organización-institución, el acontecimiento y el producto cultural (Corbetta, 2003, págs. 84-85).

Asimismo,

La unidad de análisis es una definición abstracta, que denomina el tipo de objeto social al que se refieren las propiedades. Esta unidad se localiza en el tiempo y en el espacio, definiendo la población de referencia de la investigación" (pág. 87)

Para la presente investigación, se estudia cómo ha sido la protección constitucional del derecho a la vida en niños, niñas y adolescentes en el país, durante el año 2019 y 2020.

3.5 Procedimiento Metodológico

Para desarrollar la presente investigación, se establecieron y ejecutaron una serie de pasos explícitos los cuales son descritos a continuación:

- Proceso de selección de la temática de estudio y su delimitación

- Recopilación de material principal y secundario referente al tema de violación del derecho a la vida en menores a nivel nacional e internacional
- Recopilación de material jurisprudencial actual referente a la protección constitucional del derecho a la vida del menor de edad
- Organización del material recopilado según objetivos trazados
- Formulación de conclusiones y recomendaciones.

Capítulo IV

Resultados

Los resultados expresados a continuación representan la búsqueda sistemática de información a través de la metodología señalada lo cual permite responder a los objetivos trazados durante la investigación.

Factores de vulnerabilidad del derecho a la vida en niños, niñas y adolescentes en Colombia en el periodo 2019-2020.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad por parte del Estado de competencia para disponer y ejercer acciones necesarias en la garantía de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente, el cual garantiza el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en instrumentos internacionales de los derechos humanos, en la constitución política y leyes.

Asimismo, el Código de la infancia y la adolescencia, tiene por objeto principal la garantía de todos los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo en el seno de su familia y espacio comunal donde se desenvuelven, dejando como preceptos principales la igualdad y la dignidad humana, dejando a un lado la discriminación.

Del mismo modo, dicha ley establece normas procedimentales en relación con la protección del niño, niña y adolescente, teniendo como norte el pleno ejercicio de sus derechos y libertades. En el capítulo III de dicho Código se establece cuáles son las autoridades competentes

para el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, cuya función primordial será prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los menores de edad, donde el ICBF es uno de los órganos principales.

(...) los artículos 81, 82 y 85 de la Ley 1098 de 2006 señalan los deberes y las funciones del defensor y del comisario de familia, da siendo evidente que la misión encomendada es garantizar, proteger y restablecer los derechos prevalecientes de los menores de edad (Corte Constitucional, sentencia C-890/08).

La defensorías de familia son dependencias del ICBF, por tal sentido, esta institución a partir de las defensorías previenen la vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente, además que restablece los derechos vulnerados del mismo.

El derecho a la vida es el principio que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva, y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no (Castaño, 2005).

No obstante, según la perspectiva de este autor en Colombia, el derecho a la vida es uno de los derechos mayores vulnerables para el niño, niña y adolescente. Castaño (2019), expresa que “el derecho a la vida significa derecho a no ser matado, una prohibición de causar una muerte intencional sobre una persona, en este caso niño. Son muchas las situaciones que vulnera este derecho comenzando por el conflicto armado del país, situaciones de desplazamiento.

Actualmente en Colombia miles de niños son víctimas de numerosos ataques a la población civil, otros mueren como parte de masacres u homicidios selectivos, otros como mencionamos anteriormente son víctimas de ataques de tipo sexual, son expuestos al hambre y a condiciones inhumanas, otros son explotados como combatientes y deben alzarse en armas como cuotas para que sus familias sobrevivan o simplemente no les queda otra opción que hacer parte de la guerra. Es así como nuestros niños niñas y adolescentes son víctimas del conflicto; cada año, niños y niñas son sustraídos de sus familias y vinculados a grupos armados ilegales, bandas criminales como parte de un perverso “impuesto de guerra” que es de obligatorio cumplimiento para la población sometiéndolos por temor y forzándolos a guardar silencio (Springer, 2012).

Lo anterior muestra una realidad del niño, niña y adolescente tras el conflicto armado y puede corroborarse a través de la Organización de las Naciones Unidas (OMS, 2019), en su informe acerca de los niños y el conflicto armado. Dicho informe, expresa que durante el año de análisis se han examinado 91 muertes y la mutilación de 95 de 186 niños, niñas y adolescentes en edades de hasta cinco años. La causa de la mayoría de estas muertes responde al fuego cruzado, atentados, ataques directos contra menores, bombardeos, minas antipersona y otros (Trejos, Badillo e Irreño, 2019; Meza, Arrieta y Noli, 2018).

Por ejemplo, durante el año 2019, en Antioquia el ELN mató a un adolescente de 14 años, tras haber estado vinculado anteriormente con el grupo armado.

Del mismo modo, la violencia sexual y muerte como factor de vulnerabilidad también mantiene relaciones con el conflicto armado en Colombia. Estos grupos armados ejercen poder y

dominación de los cuerpos de vidas de mujeres y niñas. En abril de 2019, se encontró una víctima de 16 años, la cual fue encontrada sin signos vitales, violencia sexual y tortura.

Las cifras citadas, pertenecen a un estudio estadístico desarrollado por la OMS, la cual recopila datos estadísticos acerca de ciertas variables, no obstante esta difiere muchas veces del valor real, pudiendo ser mayor la cantidad de vulneraciones al derecho a la vida estudiado.

Parra y Báez (2019), son explícitos al expresar que:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) analiza la vida desde el concepto de "calidad de vida", para lo cual toma en cuenta múltiples factores (físicos, psicológicos, sociales y espirituales), sin describir de manera concreta lo que el organismo entiende por "vida" en su expresión médica básica.

Esto da por hecho, que el derecho a la vida no se está cumpliendo en su debida y garante forma, de nada sirve desde las leyes tener instituciones y entes con el objeto de garantizar los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente cuando este ya no existe, cuando ya fue víctima de algún tipo de agresión que ocasionó su muerte, por tal motivo el objeto de análisis actual “el derecho a la vida, como derecho fundamental y prioritario”.

Pero no solo existe vulneración de este derecho a nivel del conflicto armado en el país. Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019), expresa en su informe que para el año, existieron 708 homicidios, donde la mayoría de estos son menores de edad entre 15 y 17 años. Del mismo modo, en enero de 2020, existieron 38 homicidios de menores de edad, el cual representa el 23,7 por ciento de las muertes totales, en las cuales también se examina muertes por accidente, muertes accidentales y hechos sin determinar.

Para el año 2019, el reporte específico de casos se caracteriza por: El mayor número de víctimas mortales del año pasado fueron adolescentes, entre los 15 y los 17 años, con 556 casos; seguidos de 82 casos de menores entre los 10 y los 14 años; 50 casos entre 0 y 4 años y los 20 restantes, de edades entre los 5 y los 9 años.

Los datos anteriores generan una realidad de cómo se está vulnerando el derecho a la vida en el país. Al respecto el control del ICBF y sus entidades no representa un abanico de soluciones representativas para el estudio, lo cual demanda de la acción del Estado en niveles alarmantes.

Castaño (2005. p.94), expresa al respecto que: ““La jurisprudencia dominante, pues tiene una visión parcial y al mismo tiempo errónea del derecho, al no situarlo en el ámbito que le corresponde a saber: el de la vida social de los hombres”.

En el mismo orden de ideas Rojas (2020:3), expresa que:

El derecho a la vida es un derecho universal, es decir que le corresponde a todo ser humano cuidarlo y respetarlo. Es un derecho necesario para poder concretar todos los demás derechos universales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales

Por todo lo anterior expuesto, se puede unificar entonces como factores que vulneran el derecho a la vida, la violencia física o agresión (homicidios), La violencia sexual que muchas veces se liga al asesinato del individuo y el conflicto armado del país y la recluta de menores.

Medidas preventivas y sancionatorias referentes al derecho a la vida en niños, niñas y adolescentes en Colombia en el periodo 2019-2020.

Al abordar esta temática, es ineludible no hablar sobre el documento CONPES 3673 de 2010, donde el Estado Colombiano trató de llevar a cabo un proceso de articulación interinstitucional, con el motivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente a la problemática de reclutamiento de la niñez y la adolescencia en el país, lo que permitió definir rutas específicas para su desarrollo y aplicación por parte de los entes municipales y departamentales (MinTic, 2010). No obstante, la Defensoría del Pueblo (2014), expresa que estos no han sido efectivos por diferentes factores enunciados a continuación:

- No han logrado disminuir o erradicar de manera oportuna, efectiva e inmediata, los factores de riesgo que propician el reclutamiento de NNA (Niños, niñas y adolescentes) por parte de los grupos armados.
- Tales rutas no lograron incorporarse dentro de las políticas, planes o programas de la institucionalidad local y municipal.
- Porque a través del Plan de Acción de este CONPES se atribuyeron responsabilidades para la prevención del reclutamiento a los actores que por su vocación y/o misión no deben desarrollarlas.
- Y porque no se consolidó un proceso de articulación entre las entidades del orden nacional con la institucionalidad territorial/departamental y municipal.

Dicha problemática, hoy años después, todavía sigue teniendo incidencia, permitiendo la estadística expresada en acápites anteriores relacionada al reclutamiento de NNA por parte de

fuerzas al margen de la ley. Un aspecto importante a señalar por la cual la situación problemática no ha podido ser abordada de manera eficiente es la incomunicación por parte de las entidades de orden territorial. La Defensoría del pueblo (2014:90), expresa que:

Esta deficiencia en la comunicación conduce a un desconocimiento por parte de las instituciones y organizaciones responsables de la Política Pública que además, propician que no se cumpla con el objetivo de prevenir el reclutamiento de NNA, originando que el trabajo de algunas organizaciones e instituciones no sea visible, contribuyendo a la confusión de mandatos entre estas. Un ejemplo de ello y que fue identificado en los diez departamentos abordados, es que los funcionarios y funcionarias de secretarías, fiscalías y personerías, señalaron como único responsable frente a la prevención del reclutamiento al ICBF.

Ante una problemática de tal orden, como la vulneración del derecho a la vida del menor, no se trata de establecer culpables de una acción, Castaño (2005:91), expresa que: “Las proposiciones legales desconocen muchas veces la realidad a las que van dirigidas”.

Desde el punto de vista de los investigadores el derecho a la vida es un derecho fundamental que corresponde a todo ser humano cuidarlo y respetarlo, debe ser garantía de derecho por parte del Estado y sus leyes, incluyendo a todos y cada uno de los entes nacionales e internacionales adscritos. Castaño (2019: 8), señala que el derecho a la vida es un factor de supervivencia, de especie, la necesidad de un aspecto global, un dialogo racional, tan necesarios en una sociedad violenta como del país.

En Junio del año 2020, el mandatario nacional aseveró la aprobación de la cadena perpetua como una sanción para quienes “pretendan agredir y quitarle la naturaleza, la espontaneidad, la alegría a un niño, violentándolo, agrediéndolo, violándolo y, lo que es aún peor, aquellos que han llegado a esa condición ruin de asesinar a un niño” (Presidencia.gov., 2020). De igual forma expresa el presidente colombiano que:

Hoy pensamos en tantos niños violentados; hoy pensamos en tantos menores que han sido víctimas de estos hechos lamentables y deleznable y hoy, como país, reaccionamos y como país le damos un mensaje claro en virtud del artículo 44 de nuestra Constitución, donde los derechos de los niños están por encima de los demás

Si bien lo anterior, significa un paso importante que permite contrarrestar, disminuir o erradicar la muerte de niños, niñas y adolescente y la vulneración de su derecho a la vida, se necesita de un conjunto de procesos normativos, reguladores y por sobre todos veladores del cumplimiento de dicha medida. Esto demanda una acción conjunta tanto del ICBF y sus entidades, personerías, contraloría y una manera de abarcar notoriamente todo el espectro regulador de dicha medida.

Colombia muchas veces destaca por tener un apartado de ley que abarca de manera eficiente un aspecto teórico, no obstante en la práctica, el valor que regula aún sigue siendo desatendido y libre (Angarita, 2018).

La Fundación Ideas para la Paz (2018), a través de un informe llevado a cabo en el año citado, establece sin políticas públicas contra los homicidios no es posible proteger la vida en Colombia, si bien no es un informe direccionado a la muertes de NNA, su contribución es

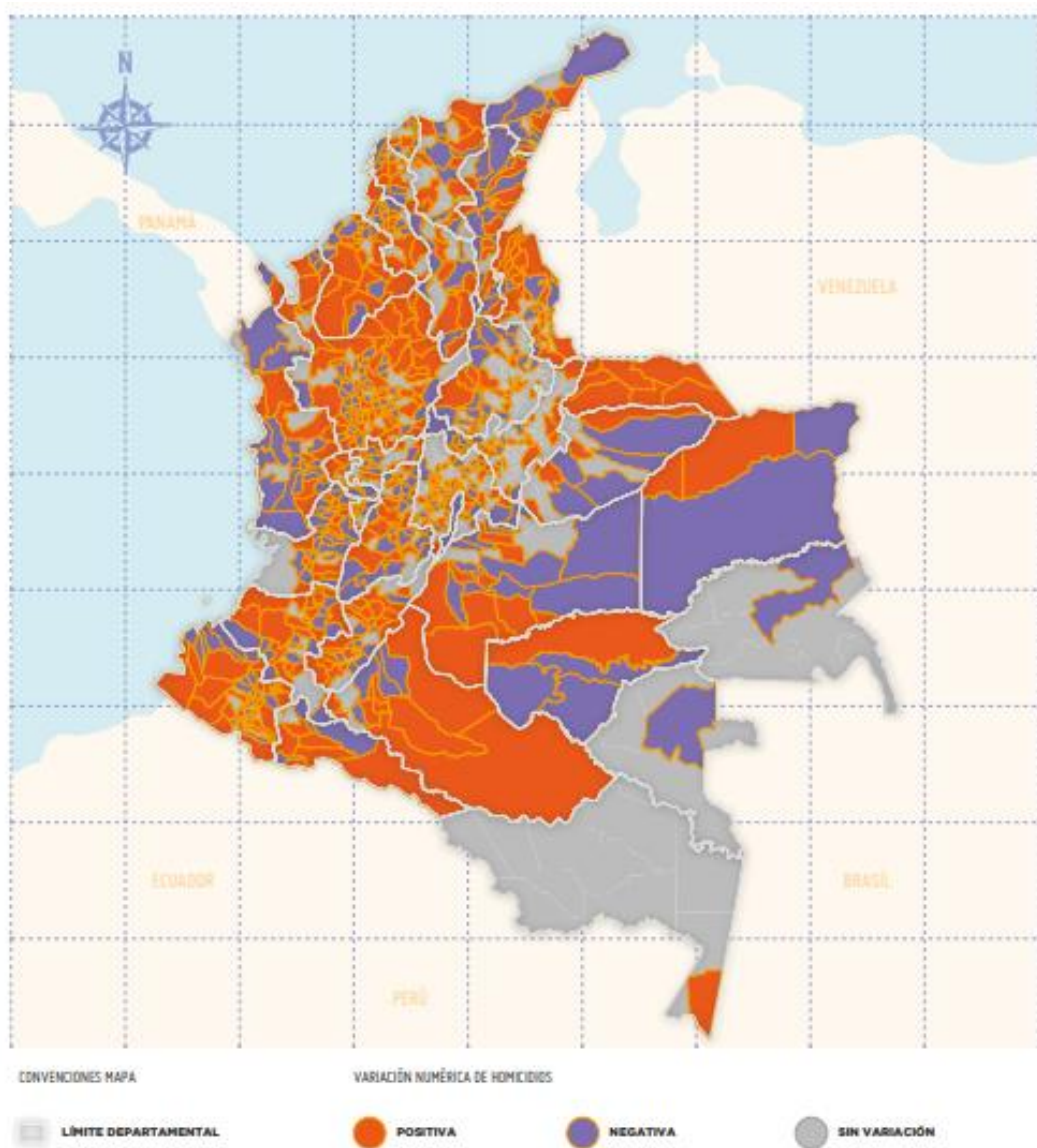
importante a la hora de abordar la temática de muertes. Desde un punto de vista inicial, enfatiza que para el Estado y sus agentes las causas de crecimiento de homicidios son proporcionales al conflicto armado del país. No obstante,

El incremento del homicidio en los últimos meses tiene distintos orígenes y manifestaciones que no pueden resumirse en una sola causa. Es posible que una parte del incremento provenga de las nuevas dinámicas de enfrentamientos entre grupos ilegales, pero también es cierto que la delincuencia común explica buena parte del fenómeno (FIP, 2018, pág. 9).

Desde el análisis también es posible destacar la demanda de un conjunto de estrategias para la protección del derecho a la vida, por lo cual es necesario el aumento de la capacidad de investigación judicial y el esclarecimiento de los eventos de violencia letal.

La siguiente figura muestra de manera eficiente como ha sido el crecimiento de homicidios a nivel geográfico.

Figura 2.



Crecimiento de homicidios a nivel geográfico 2017-2018, variación de porcentajes Fuente: FIP (2018).

La importancia de comprensión de la imagen anterior radica en el comportamiento de las regiones y departamentos, los cuales demandan mayor o menor acción por parte del Estado. Existen regiones donde la variación de homicidios ha sido negativa, por cuanto estas se componen como una importante fuente de conocimientos para entender las condiciones y

acciones a prevenir con el motivo de disminuir estos homicidios. Es importante resaltar que en el país no existen análisis e investigaciones locales o departamentales que permitan explicar esta disminución negativa. Por tal razón, este tipo de investigaciones son demandadas en la prevención de seguridad y homicidios.

En Colombia, las ciudades capitales se caracterizan por tener la mayor capacidad estatal o lo que se conoce como capacidad política relativa (Alda, 2017), dicha capacidad guarda relación con la posibilidad de gasto en recursos para la ciudadanía referentes a la seguridad ciudadana. Esta razón es suficiente para establecer que el Presupuesto Nacional está direccionado de manera confusa, al no tener información clara en la inversión de proyectos que permitan evitar muertes violentas en la ciudadanía.

Otro punto importante radica en lo señalado por Brady & King (2017), el cual manifiesta que los sistemas de vigilancia deben estar acompañados de reacciones positivas y efectivas por parte de funcionarios o un sistema judicial que pueda castigar a personas que infringen contra la vida del individuo. Durante los últimos meses, la inversión en el país en sistemas de vigilancia ha sido marcada, destacando ciudades como Medellín, Bogotá y Florencia, no obstante la compra de equipos de vigilancia por sí sola no ha sido un elemento que permita una variación significativa de homicidios en estas regiones.

Continuidad de ideas, a través del informe se destaca también como la militarización de regiones no funciona como una estrategia en la reducción de homicidios.

Las conclusiones arrojan que la militarización de Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo no ha contribuido a la reducción de los homicidios desde el punto de vista departamental. De hecho, los departamentos con mayor actividad militar, medida en resultados

operacionales declarados por el Comando General Conjunto de las Fuerzas Armadas entre enero y agosto de 2018, concentran el 75% del crecimiento de los homicidios (PIF, 2018).

Entonces se pregunta en este punto, ¿Cuál es la mejor estrategia para reducir los homicidios? Primero que todo es importante destacar porque se habla de los homicidios. En la investigación actual se habla del derecho a la vida como derecho principal, pilar, la oportunidad de vivir para el desarrollo del individuo, estudiada en menores de edad, los cuales representan cifras altas de vulnerabilidad. Cuando se comenten homicidios, se atenta directamente contra este derecho, un derecho fundamental explícito en el estado social de derecho del país.

Antes de atacar un problema social asentado como el derecho a la vida, o los homicidios a nivel de niños, niñas y adolescentes, es importante primero conocer las cifras de tal acción, regionalmente, con claridad, con el motivo de establecer un rango de acción para la disminución de la problemática. Teniendo una estadística de este, es posible que el Estado puede direccionar en manejar de manera eficiente el presupuesto nacional anual para tomar medidas al respecto. Como ha sido expresado, la compra de equipos de vigilancia no es la solución a la misma, esta debe ir acompañada de un sistema sancionatorio efectivo, que permita llevar a cabo medidas de captura y de control. Asimismo, militarizar una zona no va a evitar la disminución del flagelo, como ha sido expresado en acápites anteriores.

Para que se cumplan el derecho a la vida sobre el menor como un elemento fundamental, se genera la necesidad de unificación de una serie de entes locales y departamentales (No solo el ICBF), mediante un apartado de ley claro, regulatorio, sancionatorio y que genere acciones preventivas que permitan la disminución de esta vulneración. Como ha sido expresado en otros párrafos, emitir leyes para la no vulneración de derechos de calidad de vida, educación, maltrato físico y otros importantes en el desarrollo del niño, no tienen cabida si este ha muerto, por eso es

centra el derecho a la vida, a la existencia como factor principal, el primero de los derechos fundamentales de los cuales derivan otros.

Otros plan, aunque en menor preponderancia pero de necesario impacto en la comunidad, destacando la protección de la vida del menor de edad, son las campañas lideradas por el Ministerio de Defensa a través de la Policía Nacional de Pasto. La región destaca en altas cifras de violencia intrafamiliar, violencia contra niñas, intolerancia, la cual distintas veces termina en muerte, por tal sentido, se han desplegado acciones direccionadas a la disminución de delitos, homicidios específicamente, mediante campañas que llevan por nombre “desarma tu corazón”, mediante la consigna “es mejor amarse que armarse”, donde se llevan a cabo obras teatrales que simulan conductas de riesgo, como consumo excesivo de alcohol, maltrato, porte de armas, como hechos que detonan la muerte de una persona (Ministerio de Defensa, 2019)

Este tipo de campañas está siendo llevado en colegios, sitios nocturnos, en plazas, para concienciar y tratar de disminuir la estadística del sitio en mención. Pero no solo se establecen obras teatrales como se hizo mención, sino que se hace entrega de volantes informativos, visitas en barrios, contacto con transeúntes y otras acciones para generar cultura de paz.

Planes desarrollados por parte del Estado que garantizan la protección del derecho a la vida en niños, niñas y adolescentes en Colombia en el periodo 2019-2020.

Durante el año 2019, el ICBF a través de su directora general presentó el Plan de acción contra la desnutrición infantil, un factor de vulnerabilidad del derecho a la vida. Esta estrategia tiene como objeto la disminución de muertes en niños y niñas menores de cinco años de edad por

causas directamente relacionadas con la desnutrición, como parte del logro de metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo y Los Objetivos de Desarrollo sostenible (ICBF, 2019).

Como puntos de acción, desde el punto de vista geográfico, este tiene siete departamentos como eje focal: La Guajira, Chocó, Vichada, Guainía, Cesar, Norte de Santander y Risaralda, los cuales concentran la mayor cantidad de muertes de niños por desnutrición y causas. Como plan de acción, este plan tiene como estrategia la búsqueda de niños y niñas en situación de riesgo, mediante el uso de unidades móviles del ICBF, los cuales trabajarán de la mano con equipos médicos y de salud para tal atención.

En el año 2020, específicamente para Junio 18, en Bogotá, en sesión plena del Senado de la Republica se aprobó el proyecto de acto legislativo donde se consagra la prisión perpetua para asesinos de niños, niñas y adolescentes. De esta manera el artículo 34, queda expresado de la siguiente forma (Senado de la República, 2020):

"Artículo 34. Se prohíben penas de destierro y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.

De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.

Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.

Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua.

Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes, fundamentada principalmente en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados.

Anualmente se presentará un informe al Congreso de la República sobre el avance y cumplimiento de esta política pública. Así mismo, se conformará una Comisión de Seguimiento, orientada a proporcionar apoyo al proceso de supervisión que adelantará el Legislativo.

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación".

Si bien lo anterior, no representa un elemento definitivo a favor del derecho a la vida del niño, niña y adolescente, es un punto importante como parte de Estado en la atención de la vulneración del mismo. De igual forma, la supresión de prohibición de la prisión perpetua en la constitución política mediante la aprobación señalada, es respetuosa de garantías penales, donde resaltan los siguientes conceptos (Proyecto de Acto Legislativo N° 001 de 2019):

- **Frente al principio de proporcionalidad:** En este evento no se está imponiendo una sanción objetiva por determinada conducta, ya que solo se está habilitando la regulación de este tipo de sanción de manera excepcional, atendiendo la gravedad del delito y siempre con revisión de la medida en el término que señale el legislador.

- **Frente a la función resocializadora de la pena:** Al establecer que la medida tendrá que ser revisada en el término que señale el legislador, se está garantizando la función resocializadora de la pena, ya que esa revisión garantizará que en el caso de que se haya logrado la resocialización del individuo de manera cabal, el mismo pueda ingresar nuevamente a la sociedad rehabilitado plenamente. Este aspecto se replica de lo contenido en el artículo 77 del Estatuto de Roma, anteriormente enunciado.
- **Frente a la dignidad humana:** Como se puede observar la pena de prisión perpetua es respetuosa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se encuentra prevista como sanción por parte de la Corte Penal Internacional. Igualmente, la misma se encuentra prevista por gran cantidad de Estados a nivel internacional, por lo que no se estima que esta medida sea violatoria del principio de la dignidad humana.
- **Frente a una política criminal coherente:** Con el proyecto de acto legislativo, no se está imponiendo de manera automática esta clase de pena perpetua, sino que se reitera, solo se está habilitando al legislador, para que de manera excepcional (no aplicará para todos los casos), haga uso de una herramienta viable dentro del abanico de opciones normativas

Como puede evidenciarse, la cadena perpetua es habilitada para el legislador en casos donde sea aplicable o tenga cabida, lo que deja como resultado que sea posible aplicar cadena perpetua a cualquier colombiano, juzgado por delito de lesa humanidad, desaparición forzada, crímenes de guerra, atentar contra civiles u otros.

Conclusiones

Para el artículo 44 de la carta magna colombiana, son derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, la vida, la integridad física, seguridad social, alimentación equilibrada, identificación tener una familia, protección y otros. Del mismo modo desde las leyes en el país, la vida tiene diferentes facetas: una vida digna la cual es sujeta de protección especial por la constitución de 1991; una vida indigna: sobrellevar una vida en condiciones insoportables y distanasia: mantener una vida a todo costo, la cual no es sancionada por el ordenamiento jurídico.

El derecho a la vida es un factor principal, elemental, condicionante de otras formas en como esta es percibida por el ordenamiento jurídico, sino existe vida, no puede haber cabida de otros derechos fundamentales. La sentencia T-480/13, expresa la elaboración de vida más completa del ordenamiento jurídico: [...] el concepto de vida no es un concepto limitado a la idea restrictiva de peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio [...], extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en condiciones dignas. Lo que se pretende es respetar la situación “existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad”, ya que “al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable”, en la medida en que sea posible.

Pero qué pasa cuando se atenta contra la vida de un niño, niña o adolescente en el país, cuando existe factores de vulnerabilidad como el conflicto armado: donde se precisa el reclutamiento de NNA que se exponen a la muerte y se le inculca la muerte de otros, es decir la víctima se transforma en victimario. Este análisis deja como muerte a numerosos NNA, los cuales son víctimas de fuego cruzado, minas antipersonas, violencia, homicidios y otros. Otro

factor de vulnerabilidad es la desnutrición, presentada por estadísticas realizadas por instituciones internacionales como la OMS, donde anualmente se produce la muerte de NNA debido a la pobreza, lo que liga a temáticas como la seguridad alimentaria. Continuidad de factores se encuentra la violencia intrafamiliar, agresiones y homicidios a menores.

Todos estos factores señalados dejan al país en tercer lugar con mayor muerte de niños, por los factores expresados. Esto plantea el objeto de desarrollo de la investigación actual, como se manifiesta la protección constitucional del derecho a la vida en niños, niñas y adolescentes.

Al indagar sobre el derecho a la vida en el NNA es ineludible, la participación del ICBF sobre tales acciones, pero se plantea la pregunta ¿puede a través de sus acciones controlar la vulneración del derecho a la vida en menores tan enmarcado en la sociedad?, la pregunta se responde por si sola, las acciones llevadas a cabo por el Estado hasta el momento no han sido suficientes para mitigar la estadística relacionada al tema, todavía existen a nivel periodístico noticias que continuamente expresan la vulneración de este derecho en el país. Diferentes entes atribuyen tales índice al conflicto armado, que si bien es participe de tal vulneración este solo representa un espacio de acción dentro del mismo.

Por tal razón, se expresa la necesidad de acción por parte del Estado en la regulación de esta vulneración, si bien la aprobación de cadena perpetua para los homicidas de niños, niñas y adolescentes representa un aspecto positivo para tal fin, aún necesita de un conglomerado de acciones que permitan disminuir las tasas de muertes por un tercero o arraigadas a la desnutrición y violencia física, los cuales permitan una garantía del derecho fundamental.

Del mismo modo, se acota como la inversión en equipos de vigilancia y la militarización de algunos departamentos en el país, no son un aspecto que permita resultados óptimos, demandando una mayor atención por parte del Estado, un sistema regulatorio y sancionatorio

pertinente, medidas preventivas para tal vulneración y un apartado de Ley, con un concepto de derecho a la vida concreto, primordial y eficiente, donde calidad de vida o vida digna sean elementos posteriores al derecho a vivir a existir.

Se plantea entonces una necesidad de pronto abordaje, de instrumentos que permitan una distribución eficiente de los presupuestos nacionales, tales como estadísticas sectoriales o departamentales acerca de homicidios, muertes por desnutrición, la acción de grupos armados los cuales permitan disminuir la vulneración de este derecho fundamental, pilar y que genera acción para la protección de otros derechos fundamentales.

Referencias

- Adams (2010). Perspectiva de la niñez en Colombia en el sistema nacional de protección al menor. REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3(1): 81-89.
- Alda, E. (2017). Drivers of Homicide in Latin America and the Caribbean: Does Relative Political Capacity Matter? En F. M. Brookman, & M. Maguire, Handbook to Homicide (págs. 432-450). John Wiley & Sons, Incorporated.
- Angarita, J. (2018). Colombia: país donde abundan las leyes y escasea la legalidad. Razón Crítica, 4,195-217, doi: <http://dx.doi.org/10.21789/25007807.1302>
- Anzures (2004). Pérez Luño, Antonio Enrique, Los derechos fundamentales. Bol. Mex. Der. Comp. vol.40 no.120 México sep./dic. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332007000300017
- Arias (2012). El proyecto de investigación. 6ta. Edición. Bedoya.
- Arrieta, M. y Meza, A. (2019). Efectividad de la función de la concreción de la obligación alimentaria de los defensores de la familia en la ciudad de Barranquilla entre los años 2015 y 2017. Revistas jurídicas, 16 (2), 147-165. DOI:10.17151/jurid.2019.16.2.10.
- Bechara, A. (2018). Investigación-acción-jurídica: escenarios para una investigación activa y crítica en el Derecho. Jurídicas CUC. 14(1), 211-232. DOI: <https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.10>
- Blasco y Pérez (2007). Metodologías de investigación en educación física y deportes: ampliando horizontes. Universidad de Alicante. Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas. Disponible en: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12270>

- Brady, P. Q., & King, W. R. (2017). Technology and Homicide Investigation. En F. Brookman, E. R. Maguire, & M. Meguire, Handbook to Homicide (págs. 517-532). John Wiley & Sons, Incorporated.
- Campos (2009). La Convención sobre los Derechos del Niño: el cambio de paradigma y el acceso a la justicia. Revista IDH. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25553.pdf>
- Castaño, A (2005). Teoría dinámica del derecho (Alejando Castaño)
- Castaño, A. (2019). Introducción a los niveles de análisis contemporáneos del derecho.
- Ceberio y Watzlawick (1998). La Construcción del Universo. Herder. Barcelona.
- Congreso de la República de Colombia (2020). Senado aprueba prisión perpetua para asesinos y violadores de niños y adolescentes. Disponible en:
<https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1404-senado-aprueba-cadena-perpetua-para-asesinos-y-violadores-de-ninos-y-adolescentes#:~:text=Bogot%C3%A1%20D.C.%2018%20de%20junio,de%20ni%C3%B1os%2C%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes.>
- Constitucional, C. (2011). Sentencia T-282/11. Consultado en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA,282,11>.
- Corbetta (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid. McGraw-Hill, pp 448.
- Corredor, Villarraga, Rojas, Guayazan y Castillo (2020). Derecho a la vida (déficit en el sistema de salud colombiano). Universidad católica. Disponible en:
http://repository.ucatolica.edu.co:8080/bitstream/10983/24382/1/Derecho-a-la-vida_d%c3%a9ficit-en-el-sistema-de-salud-colombiano.pdf
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2002). Opinión consultiva. Párrafo 55.
- De Colombia, C. C. (2006). Sentencia C-355-06. Bogotá DC: Gaceta de la Corte Constitucional.

De Colombia, C. P. (1991). Constitución política de Colombia, artículo 44. Bogotá, Colombia: Leyer.

De Colombia, C. P. (1991). Constitución política de Colombia, artículo 11. Bogotá, Colombia: Leyer.

Defensoría del Pueblo (2014). Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, análisis de la política pública con enfoque étnico. Informe defensorial.

<https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/informedefensorialreclutamiento.pdf>

De la Nación, P. G. (2006). Código de la infancia y la adolescencia. Bogotá: Colombia.

De la Nación, P. G. (2006). Código de la infancia y la adolescencia, artículo 17. Bogotá: Colombia.

De la Nación, P. G. (2006). Código de la infancia y la adolescencia. Bogotá: Colombia.

De los Derechos Humanos, D. U. (2003). Declaración Universal de los Derechos humanos 1948. Tomado de <http://www.aprodeh.org.pe>.

Del derecho a la vida en Colombia. Novum Jus, 13(1), 205-228. <http://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/2019>

Justicia. ET. (2020). No cesa violencia contra menores: 38 fueron asesinados en enero. Delitos. Diario El Tiempo. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/preocupantes-cifras-de-asesinatos-de-menores-en-colombia-en-enero-459730>

Flores, García y Rodríguez (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe. P.10.

Fundación Ideas para la Paz (2018). Sin política pública contra los homicidios no es posible proteger la vida en Colombia. Disponible en:

http://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_Homicidios_Diciembre.pdf

Gaceta del Congreso (2005), Gaceta No. 551. Bogotá, Agosto 23 de 2005. Pág. 27.

Gallego (2005). El derecho a la vida en la Constitución Colombiana Principios constitucionales y derechos fundamentales. Nuevo foro penal. No. 68

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2019). Gobierno lanzó Plan de Acción contra la Mortalidad Infantil por Desnutrición. Disponible en:

<https://www.icbf.gov.co/noticias/gobierno-lanzo-plan-de-accion-contra-la-mortalidad-infantil-por-desnutricion>

Machicado, J. (2009). Apuntes jurídicos.

Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019), Forensis. Versión Web de Cifras de Lesiones de Causa Externa en Colombia 2019. Disponible en: medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis

Meza, A., Arrieta, M. & Nolis, S. (2018). Análisis de la conciliación extrajudicial civil en la Costa Atlántica Colombiana. Jurídicas CUC. 14(1), 187-210. DOI:

<https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.09>

Ministerio de Defensa (2019). Campañas contra el homicidio, más de dos mil personas impactadas. Disponible en: <https://www.policia.gov.co/noticia/campanas-contra-homicidio-mas-dos-mil-personas-impactadas>

MinTic (2010). Conpes 3673 de 2010. Disponible en:

<https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/3509:Conpes-3673-de-2010>

ONU (s.f). Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Derechos humanos. Disponible en:

<https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html>

Pabón, J. (2018). Notas acerca de la democracia en Norberto Bobbio. *Juridicas CUC*. 14(1), 9-28.

Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6555461>

Palella y MArtins (2012). *Metodología De La Investigación Cuantitativa* 3ra Ed.

Parra y Báez (2019). Una clasificación de las modalidades de vulneración

Penal, C., & COLOMBIANA, L. P. (1981). *Código penal colombiano*. Bogotá: Gama.

Pérez de Armino (2000). “vulnerabilidad”, *diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo*, Universidad del país Vasco, Icaria-Hegoa.

Presidencia.Gov. (2020). Cadena perpetua, sanción ejemplarizante para asesinos y violadores de niños: Duque. Disponible en: <https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Cadena-perpetua-sancion-ejemplarizante-para-asesinos-y-violadores-de-ninos-Duque-200618.aspx>

QUIROZ (2009). *Manual de Derecho de Infancia y Adolescencia*. Librería Ediciones del Profesional. Editorial ABC. Segunda Edición, 2009. Pág.18.

Rodríguez León, N. y otros (2011). *Sociales para pensar* 9. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Rojas, A. (2020). El derecho a la vida: ¿el derecho más vulnerado en Colombia?. Recuperado de: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24384/1/El-derecho-a-la-vida_el-derecho-m%C3%A1s-vulnerado-en-Colombia.pdf

Santesmases (2009). *Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de mercados*, Pirámide, Madrid, p.

Save the Children (2015). 27 años después de la convención: Colombia en deuda con las niñas, niños y adolescentes. Disponible en: <https://www.savethechildren.org.co/articulo/27-a%C3%B1os-despu%C3%A9s-de-la-convenci%C3%B3n-colombia-en-deuda-con-las-ni%C3%B1as-y-adolescentes>

- Solano, D. (2019). Estabilidad ocupacional reforzada en Colombia: Una mirada crítica desde la jurisprudencia. *Jurisprudencias CUC*, 15(1), 47-68. DOI: 10.17981/juridcuc.15.1.2019.02
- Springuer, N. (2012). Como lobo entre corderos. Del uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia. Bogotá: Springer Consulting Services, 34-35.
- Tejeiro (2005). Teoría General de niñez y adolescencia. Universidad de los Andes.
- Trejos, L., Badillo, R., Irreño, Y. (2019). El Caribe Colombiano: entre la construcción de paz y la persistencia del conflicto. *Juridicas CUC*. 15(1)9-46. DOI: <https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01>
- Unicef (2006). Convención sobre los derechos del niño, 1946-2006. Unidos por la infancia. Disponible en: <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>
- Zapata (2015). La vulneración de los derechos humanos de los menores en Colombia como consecuencia del conflicto armado. Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2016/hdl_10803_385841/mfzz1de1.pdf

SENTENCIAS CONSTITUCIONALES.

- Corte Constitucional, Sentencia C-890/08, M.P. Mauricio González Cuervo
- Corte Constitucional, Sentencia T-843/11. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
- Corte Constitucional Sentencia. T-179, mayo 7 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero
- Corte Constitucional, Sentencia T-348 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa